



**El ascenso de las personas
denominadas “indígenas”,
de los Pueblos Originarios
en la Participación Política
en el Estado Mexicano.**

ÍNDICE

Introducción	2
Indígenas	3
Reformas Constitucionales	16
Las Autoridades Electorales	30
Conclusión	40
Bibliografía	44

Introducción.

En México, una de las formas para lograr la representación política de los indígenas en los órganos de gobierno es a través de las acciones afirmativas (consistente en reservar un número mínimo de escaños en el Poder Legislativo, para garantizar su representación en la vida parlamentaria), en las Constituciones Políticas de las entidades federativas mexicanas se contempla el derecho que tienen las comunidades indígenas para nombrar a sus autoridades mediante sus formas tradicionales de elegirlos.

En ese sentido, se reconocen los derechos político-electorales de las comunidades indígenas (Sinaloa) y el derecho “preferencial” que tienen para ser candidatos (Chiapas y Guerrero). En otros se ha establecido una cuota mínima para formar parte de los gobiernos locales (Hidalgo, Oaxaca y Jalisco). Sólo en seis (Tabasco, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Estado de México y Sonora) se garantiza el derecho que tienen para contar con un representante indígena ante los ayuntamientos, electos por usos y costumbres.

En ese sentido, mediante las acciones afirmativas se reconoce el carácter multicultural de México y se puede observar una amplia apertura a la normatividad, para que se implementen diversos mecanismos y, a su vez, atiendan las demandas indígenas, cuya situación de marginación es reconocida por el gobierno federal, estatal y municipal.

Los criterios para identificar a las personas integrantes de los pueblos originarios o indígenas son múltiples como: la lengua originaria, la religión, el vínculo con el territorio, su organización social, los valores culturales compartidos, características biológicas heredadas y una identidad cultural que los identifica como grupo étnico (Stavenhagen, 2000, p. 39). A ello se le puede sumar que en la actualidad ocupan el lugar más bajo en la escala social, con problemas de pobreza, marginación, exclusión social, económica y política.

La firma de tratados internacionales, compromete al gobierno mexicano a implementar acciones en la constitución, leyes y políticas públicas, para que el mosaico cultural y étnico se vea reflejado en todos los aspectos de la vida social y política (Singer, 2005). En los hechos, se obliga a las instituciones públicas a implementar políticas para incluir a los indígenas en los ámbitos laboral, educativo, de salud y bienestar, con lo cual se busca acabar con siglos de discriminación, racismo y exclusión (Sonnleitner, 2013). Las cuotas electorales y otras formas de participación son algunas acciones afirmativas que buscan, en lo político, garantizar la inclusión y representación de este sector históricamente excluido (Cedillo, 2020).

Indígenas.

Las personas descendientes de pueblos originarios conocidos como indígenas, fueron los primeros habitantes del territorio mexicano y formaron civilizaciones con distintos grados de desarrollo, y que, al día de hoy, a partir de la conquista europea, se constituyeron como una gran variedad de pueblos a lo largo y ancho del territorio nacional, situándose lejos de las grandes ciudades de la época y permaneciendo por lo general aislados o marginados en lo político, económico, social y jurídico.

Debido a la diversidad de los pueblos indígenas en México, no ha resultado fácil la regulación y el tratamiento de manera integral de toda su problemática, así como su incorporación a modelos culturales mestizos propios de la modernidad o el reconocimiento de sus manifestaciones particulares a favor del respeto a la diversidad que representan.

La participación y representación política de las comunidades indígenas fueron visibles desde la época de la dominación europea por todo el continente americano; desde las famosas “Leyes de Indias”¹, de 1680, se tomaron ciertas medidas de protección para los indígenas, pero estas, lejos de beneficiar

a la comunidad la hizo débil y la hizo dependiente de la iglesia y de la caridad, era la forma de atenuar los daños que sufría esta población, es decir no fueron participativos activamente, y fehacientemente en la realidad social y política de la época, esto, al establecer “republicas de españoles” y “republicas de indios”, para evitar afectaciones en el ejercicio de los derechos consuetudinarios y las buenas costumbres de los pueblos indígenas, así, podían vivir de acuerdo a sus costumbres, siempre y cuando los mismos se apegaran a las leyes españolas y a la fe católica, que, a la postre resultaron negativas, resultando como consecuencia su aislamiento y marginación (Alvarado 2004, 72-76).

Cabe mencionar que, posteriormente a la guerra de independencia, no se hizo mención acerca de las problemáticas de los indígenas, sino hasta 1906, en el Manifiesto de la Nación y Plan del Partido Liberal Mexicano, suscrito por Ricardo Flores Magón², donde se afirma que se llevara a cabo la “Protección a la raza indígena”, pero no indica como:

“La protección a la raza indígena que, educada y dignificada, podrá contribuir poderosamente al fortalecimiento de nuestra nacionalidad, es un punto de necesidad indiscutible”

¹ Las Leyes de Indias son la legislación promulgada por los monarcas españoles para regular la vida social, civil, política y económica de los territorios americanos y asiáticos pertenecientes al Imperio español.

Fundamentalmente, son la recopilación de las Leyes de Burgos y las Leyes Nuevas, las cuales trataban de otorgar derechos a los indígenas frente a los abusos que se estuviesen cometiendo.³ Así como constituir un gran ‘corpus iuridicus’ por el que se fijaron los reglamentos para las fiestas y otras actividades culturales, junto a los intercambios comerciales y otras actividades económicas, además de pautas sobre la tributación (los impuestos) y el ejercicio de los cargos públicos (como la administración) y lo relativo a las normas de convivencia para las relaciones entre las personas de las Indias. A diferencia de otros Imperios coloniales de la época, la monarquía española mostraba un profundo celo por instaurar una base legal a sus dominios de Ultramar. Julián de Paredes (1681). Recopilación de leyes de los reinos de las Indias. Tomo Segundo.

² Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Programa del Partido Liberal Mexicano y Manifiesto a la Nación. Pág. 12. Consultado en mayo de 2024. Disponible en:

<https://archivos.juridicos.unam.mx/www/bjv/libros/12/5625/42.pdf>

Es así que, los indígenas pertenecientes a los pueblos originarios, continúan desarrollándose en nuestro país sin una estrategia clara para evitar la marginación social, económica, política y jurídica, es decir, permanecen invisibles. Pero esto cambia cuando se conoce o hay noticias de las barbaries cometidas en los campos de exterminio nazis, todas las injusticias y crímenes cometidos durante la segunda guerra mundial, por lo que se comenzó a generar una cultura de reivindicación hacia las mujeres, niños, personas mayores, migrantes y pueblos originarios, por lo que, la atención se centró en las personas víctimas de marginación en todos los sentidos.

El 31 de diciembre de 1935, se creó en México un organismo autónomo llamado Departamento de Asuntos Indígenas³, posteriormente en abril de 1940, se celebró en Pátzcuaro Michoacán, con el presidente Lázaro Cárdenas del Río, el Primer Congreso Indigenista Interamericano⁴, en el que los países participantes acordaron en crear sus propios institutos.

En el año de 1948, durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdez, se decreta la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista⁵, que tiene como finalidad investigar y divulgar los problemas relativos a los núcleos indígenas del país.

El modelo implementado por el estado mexicano, de la época postrevolucionaria se fue erosionando y desechando paulatinamente, sin ser reemplazado por uno más eficiente, hasta que, el 27 de junio de 1989, se aprobó en Ginebra, Suiza, el Convenio 169

³ Departamento de Asuntos Indígenas, Carmona Dávila, Doralicia. Lázaro Cárdenas expide nueva Ley de Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos. Memoria Política de México. Instituto Nacional de Estudios Políticos A.C.

⁴ En 1940 se realizó el Primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, Michoacán, y se organizó el Comité Ejecutivo Provisional a cargo de Luis Chávez Orozco, quien en México fue Subsecretario de Educación Pública y Jefe del Departamento de Asuntos Indígenas, como Presidente y de Carlos Girón Cerna, quien era Cónsul General de Guatemala en México, como Secretario. La Dirección Provisional del Instituto se encomendó a Moisés Sáenz. Consultado en mayo de 2024. Disponible en: <https://www.nacionmulticultural.unam.mx/movimientosindigenas/docs/310.pdf>.

⁵ LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. Consultado en mayo de 2024. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10667/ley_creacion_ini.pdf.

de la OIT⁶ (Organización Internacional del Trabajo), en el que se establecen un conjunto de derechos a favor de las comunidades indígenas en países independientes y en agosto del mismo año, México firma dicho convenio que conforme al artículo 133 de la Constitución Política, pasa a formar parte de la legislación vigente en nuestro país.

Este convenio, reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales a asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico, así como, mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven, considerando que, es necesario adoptar nuevas normas internacionales con el fin de garantizar a los pueblos indígenas su incorporación en los ámbitos jurídicos, económicos, sociales y políticos.

En la fecha en que el gobierno federal se disponía a celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la madrugada del 1 de enero de 1994, los insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomaron por las armas cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. Los “zapatistas”, como serían conocidos públicamente, provenían de los pueblos tzeltal, tzotzil, chol y tojolabal, todos ellos de la familia maya, demandaban entonces “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”, como era de esperarse el gobierno federal, envió al ejército, para poner alto a la insurrección. Así, el combate entre los “zapatistas” y ejército mexicano duraron 11 días. A partir del 12 de enero el gobierno y el EZLN iniciarían acercamientos con el fin de buscar solucionar el conflicto por la vía del diálogo⁷.

⁶ CONVENIO (No. 169) SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES, consultado en mayo 2024. Disponible en:

https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Convenio_169_PI.pdf

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), reclamaba el derecho de la propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, así como, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes comunidades indígenas en la organización del estado como en el país, la reacción del gobierno federal fue el envío de tropas del ejército a Chiapas para sofocar la rebelión. Debido a las movilizaciones de la sociedad civil, de la presión de la prensa nacional e internacional, el gobierno federal detuvo los ataques y declaró de manera unilateral un alto al fuego⁸.

Durante la primera etapa de los diálogos, que data del 17 al 22 de octubre de 1995, ambas partes mostraron mucho interés, coincidiendo en el diagnóstico de los problemas que adolecen las comunidades indígenas, así como, la presentación de demandas históricas, el EZLN, solicita en esta etapa que, el diálogo sea a nivel nacional y el gobierno quería solo situarlo a un asunto local del estado de Chiapas, lo cual representa el primer desacuerdo entre las partes. El Instituto Nacional Indigenista, presentó a la representación del Gobierno Federal un proyecto para dar respuesta, el cual resume los concesos alcanzados durante esa primera fase, y una propuesta para la segunda etapa⁹.

En la segunda etapa del 13 al 19 de noviembre de 1995, los consensos alcanzados anteriormente no se pudieron consolidar, debido a imprecisiones en las propuestas de reforma constitucional en razón de la autonomía.

Del 10 al 18 de enero y del 13 al 16 de febrero de 1996, se llevó a cabo la plenaria resolutive, en la que las partes superaron sus diferencias

⁷ Arqueología Mexicana. EL LEVANTAMIENTO ZAPATISTA DE 1994. Consultado en mayo 2024. Disponible en: <https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-levantamiento-zapatista-de-1994>

⁸ Centro Cultural Tijuana. EL LEVANTAMIENTO ZAPATISTA, CHIAPAS, 1994. Consultado en mayo 2024. Disponible en: <https://cecut.gob.mx/exposiciones/micros/semillaesperanza/levantamiento-zapatista/>

⁹ El Derecho Indígena en el Marco de la Negociación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal Mexicano, pág. 5-10 5-10. Consultado en mayo 2024. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12063.pdf>

y el estado accedió a la solicitud del EZLN, para que se realizara una reforma constitucional, con base en el concepto de pueblo indígena, el principio de autonomía, la reforma al municipio para crear, entre otras posibilidades, la de agrupar comunidades o municipios sin constituir otras instancias. Todo ello sin la necesidad de reformar el artículo 27 constitucional como era la exigencia desde la primera etapa; la creación de regiones autónomas y la pluralidad jurídica¹⁰.

Los diálogos entre el EZLN y el gobierno federal, culminaron con la firma en febrero de 1996, con los acuerdos de San Andrés sobre el “Derecho y Cultura Indígena”, que comprometían al Estado a reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente y que éstos gozaran de autonomía. Los diálogos también dieron pie a la fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI), el 12 de octubre de 1996¹¹.

La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA)¹², fue la responsable de llevar las resoluciones de los Acuerdos de San Andrés y convertirlos en una propuesta legislativa, para hacer realidad reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígena, la participación de dicha comisión fue aceptada por el EZLN y el movimiento indígena nacional, pero la integración de las propuestas emanadas de los diálogos, no se vieron reflejadas en la LEY PARA EL DIÁLOGO, LA CONCILIACIÓN Y LA PAZ DIGNA EN CHIAPAS¹³, por lo que fue rechazada por el EZLN.

El 4 de octubre de 2002, se le da al Instituto Nacional Indigenista una mayor capacidad de acción, considerándolo como Organismo público

¹⁰ Comisión Nacional de Derechos Humanos. Insurgencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Consultado en mayo 2024. Disponible en:

<https://www.cndh.org.mx/noticia/insurgencia-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-ezln#>

¹¹ teleSURtv.net. Hace 24 años el Ejército Zapatista reivindicó los derechos indígenas. Consultado en mayo 2024. Disponible en:

<https://www.telesurtv.net/telesuragenda/22-anos-del-Ejercito-Zapatista-20141225-0008.html>

¹² Cámara de Diputados LXV Legislatura. Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación. Consultado en mayo 2024. Disponible en:

<http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-Bicameral-de-Concordia-y-Pacificacion>

del gobierno federal, encargado de diseñar e instrumentar la política gubernamental para la promoción y defensa de los derechos y el desarrollo integral de los pueblos indígenas y promover su participación social organizada en el marco del reconocimiento a su naturaleza pluricultural.

En 2003, una vez acentuada la reforma constitucional del 2001, el EZLN, dio a conocer a la sociedad, la creación de Los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, en distintos municipios del estado, que se basaron en el principio del “mandar obedeciendo” -escuchan, hacen, deciden y mandan, obedeciendo a las comunidades y sus organizaciones territoriales que, dotadas de autonomía, desde su creación se formaron maestros y médicos zapatistas, edificaron escuelas y clínicas. Además, se desarrolló un sistema de justicia al que acuden tanto zapatistas como otros miembros de la sociedad, por ser más eficaz que el institucional¹⁴.

Los Caracoles en palabras de Pablo González Casanova “abren nuevas posibilidades de resistencias y de autonomía de los pueblos indígenas de México y del mundo, una resistencia que incluye a todos los sectores sociales que luchan por la democracia, la libertad y la justicia para todos”¹⁵.

El movimiento armado del EZLN, logro visibilizar tanto a nivel nacional e internacional, las problemáticas de las comunidades indígenas y su exclusión de la vida política, económica y social en México, así como, la necesidad de generar una vinculación de los derechos culturales y la normatividad jurídica de los estados, que garantice la

¹³ Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley General de Salud. Consultado en mayo de 2024. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/177.pdf>

¹⁴ La Jornada. Los Caracoles Zapatistas. Raúl Romero. Consultado en mayo 2024. Disponible en: <https://www.jornada.com.mx/2019/08/17/opinion/015a2pol>

¹⁵ “Los “Caracoles” zapatistas: redes de resistencia y autonomía”, en revista Memoria, No. 176, 2003.

inclusión e igualdad de la diversidad, y el pluralismo para el ejercicio de una vida democrática. Construyo el camino hacia un nuevo pacto, donde se priorizan los derechos humanos de todas las personas, de las minorías, de los pueblos, de las naciones y la dignidad del ser humano¹⁶.

El día 15 de abril de 2011, en el municipio de Cheran, en el estado de Michoacán, se generó una lucha de resistencia por parte de la comunidad indígena, en contra de la tala ilegal de los bosques sin el consentimiento de la comunidad, pero con el respaldo del crimen organizado.

Los grupos de “talamontes”, aprovecharon las divisiones internas de la comunidad, que generaron los partidos políticos, las autoridades permitían la tala indiscriminada de los bosques, en el ámbito federal, el gobierno declaró la guerra al crimen organizado, afectando al municipio de Cheran, debido a que sus pobladores sufrían de levantones, desaparecidos, secuestros, extorsiones y toda clase de amenazas al que se opusiera a las actividades de estos grupos.

Ante el hartazgo, el 15 de abril de 2011, un grupo de mujeres y jóvenes lograron contener a un grupo de “talamontes”, para evitar las actividades de saqueo; el encuentro se tornó complicado, así que, los pobladores hacen sonar las campanas de la iglesia y truenan cohetes, para alertar a toda la comunidad; esta, enardecida por la situación captura a cinco personas, las cuales son llevadas a la iglesia de el Calvario, las que posteriormente son liberadas.

Los pobladores de los 4 barrios¹⁷ de la comunidad purépecha de Cheran, comienzan a levantar barricadas en las calles para evitar el paso de vehículos, por lo que no se podía entrar ni salir.

¹⁶ CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SOBRE ZAPATISMO. ¿QUE ES EL ZAPATISMO? Consultado en mayo 2024. Disponible en: <https://www.cedoz.org/que-es-el-zapatismo/>

Derivado de los diálogos en las fogatas por todos los barrios; en una asamblea general celebrada el 1 de junio la comunidad de Cherán, acordó, un gobierno propio y comunitario con base en la herencia de sus antepasados, no más policía, no al sistema vertical de la toma de decisiones y no más partidos políticos, por lo que, no participo ni dejo instalar las casillas, con la finalidad de ejercer su derecho a elegir a sus autoridades a través de sus propios sistemas normativos, conocidos como: “usos y costumbres”, tal como se encuentra establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

La comunidad solicitó al Instituto Electoral del Estado de Michoacán (IEM)¹⁸, el cambio de sistema electoral, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán resolvió la petición mediante el Acuerdo CG-38/2011¹⁹, el 9 de septiembre de 2011, en el que su resolutivo ÚNICO, menciona: El Instituto Electoral de Michoacán carece de atribuciones para resolver sobre la celebración de elecciones bajo el principio de los usos y costumbres en los términos que lo solicita la Comunidad Indígena de Cherán, por lo tanto, la comunidad impugna el acuerdo mencionado, promoviendo un juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Poder de la Federación.

¹⁷ “Una subdivisión mayor que la de la manzana nos la da el barrio...Estas divisiones funcionan en relación con las elecciones, ocupación de cargos oficiales, y ciertas obligaciones municipales y ceremoniales. El barrio No. I está al noroeste y es conocido como Jalúkutin [Jarhúkutin], o en su forma hispanizada Urúkutin [Arúkutin]. Se dice que este nombre significa “en el bordo” o “algo que está en una esquinita”, aparentemente refiriéndose a su posición sobre el bordo de la barranca más grande o su posición contra una pequeña colina sobre el bordo noreste del pueblo. El barrio No. II se llama Kéiku [Kénhiku] o “de abajo” o barrio de abajo y es el barrio del sudoeste. El No. III, del sudeste, es Kalákua [Karhákua], “de arriba o barrio de arriba”...El barrio IV es Parikutin [Parhikutin]. Esta palabra significa “pasar al otro lado” y se refiere a la posición del barrio sobre el bordo de una barranca. Jacinto Zavala, Agustín 1992. Cherán un Pueblo de la Sierra Tarasca. el Colegio de Michoacán y el Instituto Michoacano de Cultura, 231 y 232.

¹⁸ El Instituto Electoral de Michoacán es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene cuya función es la de organizar las elecciones y los ejercicios de participación ciudadana que contemplan las leyes electorales. El Instituto debe conducirse bajo los principios de la certeza, legalidad, máxima publicidad, objetividad, imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo. (Artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo). Instituto Electoral de Michoacán. Consultado en mayo 2024. Disponible en: <https://www.iem.org.mx>

¹⁹ Instituto Electoral de Michoacán. Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán por el que se da respuesta a la petición de la comunidad indígena de Cherán para celebrar elecciones bajo sus usos y costumbres. Consultado en mayo 2024. Disponible en: https://www.iem.org.mx/documentos/Acuerdos/2011/acuerdo_peticion_de_comunidad_indigena_de_cheran_09_de_septiembre_2011.pdf

El 2 de noviembre el tribunal, emitió su resolución en el Expediente SUP-JDC-9167/2011²⁰, revocando el acuerdo del Consejo General del IEM, determinando que, los integrantes de la comunidad indígena de Cherán tienen derecho a solicitar la elección de sus propias autoridades, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a los derechos humanos.

Se dejan sin efectos todos los acuerdos de las autoridades electorales locales relacionados directamente con la elección de integrantes del Ayuntamiento en el Municipio de Cherán, para la preparación y organización de los comicios conforme al régimen de partidos políticos.

Autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, especialmente, la dignidad e integridad de las mujeres (artículos 2º, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, apartado 2, del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes Convenio, así como 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).

La organización comunal, optada por el pueblo de Cherán, en la que, a través de las fogatas, instalación de un consejo en cada barrio y las asambleas, con base en la honestidad, protección al medio ambiente, con los principios de no robar, ayuda mutua, no mentir y revocación de mandato, pone en duda al sistema de partidos políticos que prevalece en nuestro país.

²⁰ Sentencia SUP-JDC-9167/2011. Actores: Rosalva Durán Campos y otros. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Magistrado Ponente: José Alejandro Luna Ramos. 2011. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultado en mayo 2024. Disponible en: <https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-9167-2011>

Por último, en el año 2018 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas²¹, como un Organismo descentralizado, que forma parte de la Administración Pública Federal, al servicio de los pueblos indígenas y afromexicanos, tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país es parte.

²¹ El Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país es parte; Gobierno de México. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Consultado en mayo 2024. Disponible en:

<https://www.gob.mx/inpi>





Foto: Resumen Latinoamericano

Reformas constitucionales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sufrió diversas reformas constitucionales que formaron parte de esta evolución, a favor de la protección de los derechos de las comunidades indígenas.

La primera reforma, data del 28 de enero de 1992, donde en el artículo 4, se reconoce a México como una nación pluricultural:

“La nación mexicana tiene una gran configuración pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, ritos, costumbres, recuerdos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del estado. En los juicios y procedimientos agrarios en aquellos que sean parte, se tomaran en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.”

La segunda reforma importante, es la del 14 de septiembre de 2001, en la que el contenido del artículo 4, se integra en su artículo 2 y se añade la definición de los pueblos y comunidades indígenas, identidad indígena y su libre determinación:

“La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las Constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.”

En las reformas del 22 de mayo de 2015²² y la del 29 de enero de 2016²³, se definen los derechos político-electorales indígenas en el que se determina que, en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales; se establece la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. Modificando el Apartado A, romano III; Apartado B, romano IX:

“A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

²² Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación. DECRETO por el que se reforma la fracción III, del Apartado A, del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultada en mayo 2024. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5393363&fecha=22/05/2015#gsc.tab=0

²³ Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación. DECRETO por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Consultada en mayo 2024. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016#gsc.tab=0

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutará y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.”

En la reforma del 06 de junio de 2019²⁴, se establece que las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas, modificando la fracción VII del apartado A:

“VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables.”

La sexta y última reforma hasta el momento, de fecha 09 de agosto de 2019²⁵, se incluyen en el apartado C, a los pueblos y comunidades afromexicanas.

“C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.”

Como se ha podido observar, estamos ciertos que, ya existe un andamiaje jurídico, tanto nacional como internacional, que protege la participación política y la representación de las comunidades indígenas, el cual, se plasma en el contenido actual del artículo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a su letra expresa:

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

²⁴ Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación. DECRETO por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros. Consultada en mayo 2024. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019#gsc.tab=0

²⁵ Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación. DECRETO por el que se adiciona un apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultada en mayo 2024. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5567623&fecha=09/08/2019#gsc.tab=0

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad

de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

Fracción reformada DOF 22-05-2015, 29-01-2016

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables.

Párrafo reformado DOF 06-06-2019

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Párrafo reformado DOF 29-01-2016

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunida-

des. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para

que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Fracción reformada DOF 29-01-2016

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afro-mexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.

Apartado adicionado DOF 09-08-2019

Artículo reformado DOF 14-08-2001"

Como puede observarse, dentro de las ocho fracciones del Apartado A; se establece la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, el ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos, formas de convivencia, elección de sus representantes, medios para poder preservar y enriquecer sus lenguas y cultura, bajo los términos que se precisen en las constituciones y leyes de los Estados.

En el Apartado B, se pueden identificar diversas garantías que, el Estado deberá otorgar a los pueblos y comunidades indígenas, para lograr la igualdad de oportunidades y bienestar, de entre ellas se encuentra: la mejora de la vivienda, apoyo al desarrollo regional, acceso a todos los servicios de salud, incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, protección de los migrantes indígenas y de sus familias y la asignación de presupuestos federales, estatales y municipales para su desarrollo.

Lo anterior, a manera de entender el compromiso que existe con los pueblos y comunidades indígenas, para evitar las injusticias de las que han sido parte en años pasados.

Por último, en el Apartado C, se hace extensiva todos los derechos que han adquirido los pueblos y comunidades indígenas a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, formando parte de la nación pluricultural de los Estados Unidos Mexicanos.

Por todo lo anterior y del análisis realizado al artículo 2, de nuestra carta magna, México ha trabajado reconociendo los derechos de las comunidades indígenas y a su vez la integración social, y cultural de cada una de ellas al estado mexicano garantizando su autonomía y su libre determinación, así como también lo determino el Convenio 169 de la OIT y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son vinculatorias para los países adherentes entre ellos México.







Foto: Zona Docs

Las autoridades electorales.

A nivel nacional, empezamos a identificar la intención de regulación por parte del INE (Instituto Nacional Electoral)²⁶, en busca de garantizar que las mujeres y hombres indígenas ejerzan sus derechos de votar y ser votados en condiciones de igualdad, avanzando en la conformación de distritos indígenas. No ha sido fácil, debido a que las comunidades se encuentran fuertemente fragmentadas y dispersas, con tradiciones, usos y costumbres diferenciados y propios. De ahí la urgencia de identificar concretamente las identidades comunales de las distintas regiones pluriétnicas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Constitución Política, somos una república representativa, democrática, laica y federal. Entendemos la democracia como “el sistema en que el pueblo en su conjunto ejerce la soberanía y en nombre de la misma elige a sus gobernantes” (Covarrubias 2016, 151). En este sentido, para garantizar la efectiva participación de toda la ciudadanía; el respeto de nuestros derechos y nuestra voluntad política; delimitar las reglas y el rumbo de nuestro país, hemos pasado a lo largo de la historia por conflictos sociales, económicos, políticos que han determinado el camino y consolidado las instituciones como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quienes han trabajado en combatir el rezago histórico y en la protección de los derechos políticos de los pueblos originarios.

Cualquier representación de los indígenas, tiene que partir del derecho a su libre determinación establecida constitucionalmente, sin la cual estará desvinculado de las dinámicas comunitarias que les dan su verdadero contenido a los proyectos colectivos, a los valores, las culturas y las identidades indígenas de México.

²⁶ El INE es la máxima autoridad electoral del Estado Mexicano, que además de llevar a cabo las elecciones federales y emitir la Credencial para Votar, realiza una serie de actividades tanto al interior del instituto como para la ciudadanía.

A partir de la reforma constitucional de 2014, el INE evolucionó hacia una Institución de carácter nacional a partir de la cual los estándares con los que se organizan los comicios electorales, se homologaron para fortalecer la democracia electoral y garantizar el ejercicio de los derechos político – electorales de la ciudadanía.

Nuestros principios rectores son: legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, establecidos en el mandato legal que dio origen al IFE y que se enriquecieron con el INE.

Instituto Nacional Electoral. Consultado en mayo 2024. Disponible en:

<https://www.ine.mx/sobre-el-ine/>

La elevada dispersión territorial de las poblaciones indígenas, su migración y su diversidad, generan dificultades para que las autoridades garanticen sus derechos político-electorales; esto implica inevitablemente que muchas medidas tienen que ser pensadas, concebidas y aplicadas con un grado considerable de descentralización, iniciando con el nivel de las regiones pluriétnicas en las que los indígenas dejan de ser “minoría” pero privilegiando sobre todo el ámbito comunal, en el que los pueblos y las comunidades ejercen el poder efectivamente, para evitar diversos problemas que se han generado derivados de la recomposición de fuerzas locales, del reacomodo del control caciquil y de las relaciones clientelares preexistentes; del manejo de los recursos asignados por la Federación a los municipios; de los conflictos entre la cabecera municipal y las agencias municipales y la policía; de los casos en que se generan conflictos entre habitantes del municipio que no pertenecen a la comunidad (avecindados) y quienes sí forman parte de ella; de la lucha por la participación de las mujeres que, en algunos casos, como se ha indicado, se encuentra proscrita en las comunidades, y, por supuesto, de la interpretación jurídica de las reglas de usos y costumbres cuando se enfrenta a la resolución de controversias que se suscitan en los procesos electorales.

Derivado de las distintas problemáticas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)²⁷, ha emitido resoluciones emblemáticas, tal es el caso de lo resuelto para de la comunidad del Municipio de Asunción, Tlacolulita, en Oaxaca (SUP-JDC-037/99)²⁸; la comunidad en Asamblea General, mediante el sistema de usos

²⁷ El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de las y los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral.

Está conformado por una Sala Superior, integrada por siete magistraturas; cinco salas regionales y una sala especializada, con tres magistraturas cada una. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultado en mayo 2024. Disponible en: <https://www.te.gob.mx/contenidosSalas/acercaDe>

²⁸ Sentencia SUP-JDC-037/1999. Actores: Herminio Quiñónez Osorio y Ángel García Ricárdez. Autoridad responsable: LVII Legislatura Del Congreso Del Estado De Oaxaca, Erigida En Colegio Electoral, Y Consejo General Del Instituto Estatal Electoral De Oaxaca. Magistrado Ponente: José De Jesús Orozco Henríquez. 1999. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultado en mayo 2024. Disponible en: <https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-37-1999>

y costumbres, eligió a sus autoridades municipales para el trienio 1999-2001, la cual fue ratificada el 8 de noviembre de 1998, en Asamblea General Extraordinaria y ante la presencia de representantes del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca.

En este precedente se lograron avances importantes en el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y en consecuencia efectuaron elecciones conforme a sus sistemas tradicionales; cabe señalar que, esta resolución fue antes de la reforma constitucional de 2001.

El caso “Tanetze” (SUP-JDC-11/2007)²⁹ es un precedente histórico en las resoluciones del Tribunal Electoral en 2007, Tanetze es una comunidad cuya problemática fue la siguiente: a finales de 2002 el Congreso del Estado de Oaxaca había decretado la desaparición de los poderes en su municipio, por lo que habían nombrado un administrador municipal, sin que se hubieran celebrado elecciones. Lo relevante de la resolución del Tribunal es que se establece la suplencia absoluta de la queja, es decir que se subsanaron las omisiones o imperfecciones en los conceptos de violación o los agravias planteados, la Sala Superior llevó esta medida proteccionista para corregir los defectos o insuficiencias, por tanto, estimó que son un grupo marginado y en condiciones de desigualdad material porque existían impedimentos para su acceso a la justicia (Bustillo 2017, 24); además, en dicha resolución ORDENA al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de que disponga lo necesario, suficiente y razonable para que, mediante la conciliación pertinente, consultas requeridas y resoluciones correspondientes, se considere la posibilidad de realizar elecciones de concejales en el municipio de Tanetze de Zaragoza, Oaxaca.

En el caso San Jerónimo Sólola (SUP-REC-2/2011)³⁰, a parte de la validez de la elección, se impugnaba la edad impuesta por la comunidad a todos los que quisieran ser candidatos para ser electos en los comicios municipales bajo el sistema de normas consuetudinarias; por lo tanto, no se encuentra en el expediente irregularidad alguna por la cual merezca ser anulada la elección de los

²⁹ Sentencia SUP-JDC-11/2007. Actores: Joel Cruz Chávez y Otros. Autoridad responsable Quincuagésima Novena Legislatura Del Estado De Oaxaca y otras Magistrado Ponente: José Alejandro Luna Ramos. 2007.

Consultada en mayo 2024. Disponible en: <https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-11-2007>

concejales al Ayuntamiento de San José Sósola, Oaxaca ya que, en lo general, se advierte que:

1. La elección fue organizada por la autoridad que decidió la mayoría, quien incluyó la participación de representantes de las planillas contendientes y observó las reglas establecidas por la comunidad.
2. La actuación de la autoridad fue transparente, pues de todos sus actos emitió las comunicaciones y convocatorias correspondientes para los interesados.
3. Se instalaron cinco casillas con presidente, secretario y representantes de las planillas contendientes, quienes registraron a los que emitieron su voto, y al final de la jornada contaron las boletas, y registraron sus resultados en las actas diseñadas al respecto.
4. Utilizaron listas para anotar a los electores que sufragaron, actas de jornada electoral y de cómputo, así como tinta indeleble, urnas y mamparas.
5. Los resultados se hicieron llegar el mismo día al Ayuntamiento, quien sesionó junto con los representantes de las planillas de inmediato para realizar el cómputo final, y finalmente ordenó el envío del paquete electoral al Instituto Estatal Electoral para que procediera respecto a la declaración de validez y entrega de constancias de mayoría.
6. Si bien algunos ciudadanos no estuvieron conformes con la forma de realizar la elección, la autoridad electoral agotó las etapas conciliatorias correspondientes, pero la conciliación no pudo lograrse porque el grupo minoritario no aceptó la voluntad de la mayoría,

³⁰ Sentencia SUP-REC-2/2011. Actor: Emilio Mayoral Chávez. Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial De La Federación, Correspondiente a La Tercera Circunscripción Plurinominal, con Sede En Xalapa, Veracruz. Magistrado Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar. 2011. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultado en mayo 2024. Disponible en:

<https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-REC-2-2011>

a pesar de haberse sometido al proceso de consulta respectivo (el que debían hacer cada una de las autoridades de las localidades, respecto de los ciudadanos).

Por lo que, en este recurso de reconsideración (REC)³¹, el tribunal resuelve confirmar el Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, aprobado en sesión de 9 de diciembre de 2010, en el que se acordó que la renovación de concejales en el Municipio de San Jerónimo Sósola sería bajo el régimen de normas de derecho consuetudinario.

Uno de los casos más conocidos fue el de Eufrosina Cruz, originaria de Santa María Quigolani en la sierra zapoteca, en Oaxaca; que por el simple hecho de ser mujer no puede participar en los asuntos públicos de la comunidad según los “usos y costumbres”. En noviembre de 2007 tuvo la mayoría de votos y no se le reconocieron; esto conllevó a la reforma del artículo 25 fracción II de la Constitución oaxaqueña y garantizar la efectiva, plena y total participación de la mujer en los procesos electorales. También se presentan otros casos de exclusión para participar en la vida política como los no católicos, de los avecindados y en la mayoría de las asambleas sólo asisten los varones (Hernández 2007, 45).

Como ya fue explicado, en Michoacán un caso emblemático fue el de la comunidad de “Cherán” (purépecha), por medio del expediente (SUP-JDC-9167/2011)³², el tribunal determina que los integrantes de la comunidad indígena de Cherán tienen derecho a solicitar la elección de sus propias autoridades, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a los derechos humanos y deja sin efectos todos los acuerdos

³¹ Los artículos 61, párrafo 1, inciso b), y 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establecen que el recurso de reconsideración procede en contra de sentencias de las Salas Regionales en las que se haya determinado la inaplicación de una norma electoral por considerarla inconstitucional. Empero, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia, reconocido en el artículo 17 constitucional y con el objeto de verificar la regularidad constitucional de los actos de autoridad en materia electoral, debe concluirse que el recurso de reconsideración también es procedente cuando en la sentencia impugnada se omite el análisis del planteamiento de inconstitucionalidad, o bien, se declaran inoperantes los argumentos respectivos, pues su análisis es de tal trascendencia que amerita dar certeza sobre los parámetros de constitucionalidad de las leyes de la materia. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis 277. Consultada en mayo 2024. Disponible en: [https://bj.scjn.gob.mx/doc/tesis/7PVoMHYBN_4klb4H2oau/"Derecho%20de%20acceso%20a%20la%20justicia](https://bj.scjn.gob.mx/doc/tesis/7PVoMHYBN_4klb4H2oau/)

de las autoridades electorales locales relacionados directamente con la elección de integrantes del Ayuntamiento en el Municipio de Cherán, para la preparación y organización de los comicios conforme al régimen de partidos políticos.

En el ámbito de representación federal, hay que reconocer el trabajo realizado por María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy”, precandidata independiente durante el proceso electoral federal 2017-2018, como la primera mujer indígena propuesta para ocupar la presidencia de la República, que, aunque no obtuvo el número de firmas establecido a través de los Acuerdos Generales del Instituto Nacional Electoral, para ser candidata es un avance importante en la lucha de las mujeres indígenas por ocupar cargos de elección popular.

Tales controversias tienen que ver con las etapas y momentos propios del proceso electoral: definición o reconsideración del régimen electoral (por usos y costumbres o por partidos), así como la inconformidad con los resultados y la apelación de la calificación de la elección (controversias postelectorales y problemáticas administrativas).

La conflictividad electoral en municipios regidos por usos y costumbres ha generado una compleja realidad a la que las instituciones encargadas de velar por los procesos electorales se han enfrentado con dificultades. En primer lugar, porque no existen principios constitucionales y bases legales suficientes para el desarrollo de los derechos reconocidos de las comunidades y porque la escueta reglamentación existente no prevé eficientemente los mecanismos de resolución de conflictos. En segundo lugar, por la dificultad que implica reglamentar esos procedimientos que, son orales y variables.

³² Sentencia SUP-JDC-9167/2011. Actores: Rosalva Durán Campos y otros. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Magistrado Ponente: José Alejandro Luna Ramos. 2011. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultado en mayo 2024. Disponible en:

<https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-9167-2011>

Todos estos criterios emitidos en las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su Sala Superior y Salas Regionales fueron el impulso para reformas importantes en la Constitución mexicana; el artículo segundo, apartado A, fracción III fue reformado en 2015 y 2019, en el sentido de que los pueblos y comunidades indígenas tendrán autonomía y libre determinación para elegir a sus autoridades de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas; ejercer sus formas de gobierno interno, y que hombres y mujeres disfrutarán y ejercerán su derecho a votar en condiciones de igualdad, podrán desarrollar los cargos públicos para los que hayan sido designados respetando el pacto federal y la soberanía de los Estados; en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en las elecciones municipales.

En todos los juicios que deba resolver el Tribunal Electoral, en que sean parte los miembros de los pueblos indígenas, se debe realizar un estudio de sus costumbres y cultura. Es decir, analizar el fenómeno o problema de manera inter, multi y transdisciplinaria (Covarrubias Dueñas, 2008, 45); por tanto, no solo son pertinentes los estudios o periciales antropológicas para resolver un asunto; sino que es determinante profundizar en su contexto histórico, los valores protegidos por dichas comunidades a través de sus normas políticas, económicas, religiosas, culturales, etc., como principios normativos aplicables en la resolución de cualquier conflicto y de esta forma tratar de comprender la relación entre la vida, ritos y costumbres de cada una de las agrupaciones, así como sus propósitos, roles entre sus habitantes, instituciones, organización social y política, jerarquía en los cargos entre sus habitantes. Por tanto, entender desde la perspectiva de los teiwaris y xinuras (hombres y mujeres mestizas en lengua wixárika) lo complicado del escenario indígena y los valores protegidos, lo que es importante para ellos, para convenir, establecer, consultar, dialogar y emplear los ordenamientos jurídicos que de verdad protejan la participación política de estos pueblos, así como concientizar a las diferentes autoridades

mexicanas en la importancia del respeto, conocimiento y valorización del derecho consuetudinario³³.

Cada una de las comunidades indígenas en nuestro país, cuentan con sistemas jurídicos y derecho propio que las regulan. La verdadera solución está en manos de los juristas, legisladores y jueces como actores principales, en el estudio cuidadoso de los valores fundamentales protegidos en una comunidad o de sus especificidades culturales a la hora de resolver o dictar una sentencia, buscar acuerdos y soluciones comunes, más que el reconocimiento, el pacto o diálogo intercultural (Correas 2007, 11).

Por lo que debe de haber una reforma político-electoral, que considere, no solo la participación indígena individual, sino que considere una verdadera representatividad de los pueblos originarios, las acciones afirmativas solo otorgan un pequeño espacio, pero la base fundamental del derecho es que se establezca en una reforma electoral; que no solo garantice la individualidad, sino que alcance la representatividad a la diversidad de los indígenas en México.

Órganos de dirección del partido político Morena, que promueven la organización de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Es evidente que hay múltiples avances; y en las elecciones de 2018, 2021 y 2024, los partidos políticos estaban obligados a postular candidaturas indígenas, mediante acciones afirmativas, pero sin ser suficientes para poder incorporar la representación política de grupos y comunidades indígenas, es decir se asegura la representación individual de las personas indígenas pero deja de lado una representación como tal de los pueblos y comunidades en los ámbitos de toma de decisiones tanto en los congresos federales y locales

³³ Derecho consuetudinario, también llamado usos y costumbres, es una fuente del derecho. Son normas jurídicas que se desprenden de hechos que se han producido repetidamente en el tiempo en un territorio concreto. Tienen fuerza vinculante y se recurre a él cuando no existe ley (o norma jurídica escrita) aplicable a un hecho. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consultada en mayo 2024. Disponible en:

<https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesa/tr709.htm>.

que cuide su integración su estilo de vida, cosmogonía, cosmovisión, sus usos y costumbres para tener una voz y que prevalezca esto con las normas positivas que se están dando que afectan sus intereses.

Una auténtica representación política indígena implica, así, pasar del reconocimiento social y tolerancia cultural a la materialización del respeto a los usos y costumbres de las comunidades originarias y la posibilidad de ejercer sus derechos políticos-electorales como ciudadanos. Se debe buscar lograr el reconocimiento como sujetos políticos, con derecho pleno, en forma equitativa y justa, para participar en la toma de decisiones.

El partido político Morena, en su estatuto se establece que: “es un partido-movimiento de izquierda y antineoliberal conformado por mexicanas y mexicanos libres que impulsan la Cuarta Transformación de México y que busca dar continuidad a las luchas históricas del pueblo mexicano en favor de la independencia y la soberanía, la democracia y la justicia, las libertades y los derechos individuales y sociales”. Que tiene como finalidad la transformación de la sociedad, en la que busca “un Estado que garantice dentro de sus fronteras la paz con justicia, la integridad física, mental y patrimonial de todas las personas, el respeto a las diferencias y a las minorías, la dignidad de los pueblos originarios y afromexicanos, la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.”

En ese sentido, dentro de sus órganos de dirección ejecutiva, conforma dentro del Comité Ejecutivo Nacional, al Secretario/a, de Pueblos Originarios, cuyas facultades se encuentran establecidas en el artículo, 38, inciso i, que a la letra expresa:

“i. Secretario/a de Pueblos Originarios, quien será responsable de promover la organización de los indígenas y afromexicanos en morena; su vinculación con las

organizaciones y pueblos indígenas y de campesinos del país; así como de participar en foros, conferencias y otras actividades públicas en defensa de los derechos de los pueblos originarios, su organización y participación política;”

Morena, al ser considerado un partido político nacional, cuenta con órganos de dirección a nivel estatal integrados en los Comités Ejecutivos Estatales; cada uno de ellos cuenta con Secretario/a de Pueblos Originarios y de acuerdo con el artículo 32 de los estatutos inciso j sus facultades son:

“j. Secretario/a de Pueblos Originarios, quien se encargará de promover la organización de los indígenas y afromexicanos en morena en el estado y constituir el vínculo con las organizaciones indígenas y afromexicanas en el estado;”

De acuerdo a lo citado, estos órganos del partido Morena son los responsables de identificar e integrar las costumbres, usos, prácticas y tradiciones, de las diversas comunidades indígenas establecidas en el territorio que les compete, para que por medio de la representación federal o local estas puedan mediante sus representantes o candidatos poder acceder a un cargo público, con el fin de garantizar la preservación de sus valores, principios, intereses o lo que consideren trascendente para la comunidad que representan.

La existencia de estos órganos, en la organización de Morena, resulta importante, debido a que, los grupos o comunidades indígenas se han diseminado por todo el territorio nacional, desarrollando sus propias normas, conforme a su contexto y circunstancias específicas; sin embargo, quienes han detentado el poder del Estado o los actuales poderes, no siempre se han ocupado de conocer las costumbres, prácticas, usos y demás formas de conducta, sino que establecen normas imperativas, generales, abstractas, impersonales y heterónomas, sin el conocimiento de los valores, principios e intereses

de los grupos ancestrales del país; por tanto corresponde a Morena, concientizar, estudiar su historia, antropología, sociología, su economía y demás elementos culturales que se desconocen, para que las normas sociales y jurídicas armonicen con sus usos y costumbres (Miranda Torres, 2017, 36).

Conclusión

Podemos reconocer que hay avances importantes, pero aún hay mucho que lograr, existen limitaciones en cuanto a su alcance, principalmente lo que se refiera a la libre determinación, en ese sentido para asegurar la participación y representación política el estado debe respetar este derecho fundamental que ya está reconocido a nivel constitucional.

Los derechos político-electorales de las comunidades indígenas, serán sustantivos, trascendentes y significativos, si se garantiza la capacidad de decisión dentro de los órganos políticos si se dan, en situación de igualdad, equidad y respeto a la función que encarna un cargo de gobierno. Las posibilidades de diseño e implementación de nuevas y mejores formas de que las comunidades indígenas accedan a cargos públicos en México deben verse como un ejercicio perfectible que, esperamos, sirva de base para avanzar en el reconocimiento de un mundo abierto a las diversas formas de participación política de toda la sociedad.

El Estado tiene un gran trabajo, conocer y estudiar la realidad jurídica de las diferentes comunidades, dotar de un trato particular y apegado a los valores culturales, después planear toda una estrategia para una efectiva administración de justicia a estos pueblos, que contribuya a la inclusión más justa, equitativa y efectiva de las minorías, tanto en el Congreso de la Unión y en los otros órganos de gobierno, como en el mismo seno de sus comunidades. Lejos de oponerse a las formas indígenas de participación política, la democracia representativa es una condición y una garantía para que

éstas puedan ejercerse en una forma plural, en el respeto de la diversidad, de las diferencias y de los derechos humanos. Independientemente de los orígenes mesoamericanos, europeos, africanos, asiáticos o mestizos de sus representantes, lo que está a discusión son los principios comunes que han de regir los proyectos e ideales de una nación multicultural tan diversa, rica y emblemática como es México.





Foto: Ollin Yoliztli Dance Academy

Bibliografía

Stavenhagen, Rodolfo 2000. Conflictos étnicos y Estado Nacional. Ciudad de México: Siglo XXI e Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social.

Singer Sochet, Martha 2005. Movimiento indígena en México. Representación, poderes y política. México: Gernika.

Singer Sochet, Martha 2014. ¿Inclusión política indígena? En Guillen, D y Moniváis A. (coords.). La representación política de cara al futuro. Desafíos para la participación e inclusión democrática en México. México: Colegio de la Frontera Norte, 327-359.

Sonnleitner, Willibald 2013. La representación legislativa de los indígenas en México. De la representación descriptiva a una representación de mejor calidad. Temas selectos de Derecho Electoral, 32. México: TEPJF.

Jacinto Zavala, Agustín 1992. Cherán un Pueblo de la Sierra Tarasca. el Colegio de Michoacán y el Instituto Michoacano de Cultura, 231 y 232.

Cedillo Delgado, Rafael 2020. Representación política de Indígenas y afrodescendientes en América Latina. Los casos de México, Perú y Costa Rica. Toluca: Instituto Electoral del Estado de México.

Alvarado Planas Javier, "Fundamentación historicista de los derechos humanos", en Yolanda Gómez Sánchez, coord., Pasado, presente y futuro de los derechos humanos. Pp. 72-76.

Bustillo Marín, Roselia. 2017. Líneas jurisprudenciales Derechos político electorales de los indígenas, México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Luna Ramos, José Alejandro. 2014. Los derechos políticos de las comunidades Indígenas: aportes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México: TEPJF.

Pérez de los Reyes, Marco Antonio. 2013. Los Derechos fundamentales de los indígenas, México: Porrúa.

Hernández Díaz, Jorge. 2007. Dilemas de la construcción de soberanías. En Ciudadanías diferenciadas en un estado multicultural, coordinador Jorge Hernández Díaz, 35-86. México: Siglo veintiuno editores.

Miranda Torres, Roxana Paola, Covarrubias Dueñas, José de Jesús, et al. 2008. La Nomología de las Comunidades Precuahtemicas en México: siglos XV-XXI. México: Gobierno del Estado de Oaxaca.

Miranda Torres, Roxana Paola. 2017. Tesis doctoral, Universidad Panamericana.

CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2020. México: Porrúa.

Sentencia SUP-JDC-00037/1999. Actores: Herminio Quiñones Osorio y Ángel García Ricárdez. Autoridad responsable: LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca erigida en Colegio Electoral y Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. Magistrado Ponente: José de Jesús Orozco. 2000. México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disponible en: <https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JDC/sup-jdc-00037-1999.htm>

Sentencia SUP-JDC-11/2007. Actores: Joel Cruz Chávez y otros. Autoridad responsable: Quincuagésima novena legislatura del Estado de Oaxaca y otras. Magistrado Ponente: José Alejandro Luna Ramos. 2007. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disponible en <http://sitios.te.gob.mx/Defensoria/inside/expedientes/1/2/0>

Sentencia SUP-REC-2011. Actor: Emilio Mayoral Chávez. Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz. Magistrado Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar. 2011. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disponible en <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/sup/2011/rec/sup-rec-00002-2011.htm>

Sentencia SUP-JDC-9167/2011. Actores: Rosalva Durán Campos y otros. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Magistrado Ponente: José Alejandro Luna Ramos. 2011. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disponible en <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/sup/2011/jdc/sup-jdc-09167-2011.htm>

Sentencia SG-JDC-35/2019. Actores: Rogelio Vázquez Minjarez y otros. Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Magistrado Ponente: Sergio Arturo Guerrero Olvera. 2019. Guadalajara, Jalisco: Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disponible en: https://www.te.gob.mx/ee/sg/2019/jd/35/SG_2019_JDC_35-844286.pdf

The image features a vibrant, geometric pattern of overlapping triangles and lines in shades of green, yellow, orange, pink, and teal. In the top-left corner, the word "NOTAS" is prominently displayed in a bold, blue, sans-serif font. Below this title, the page is filled with 15 horizontal purple lines, providing a structured space for taking notes. The overall design is clean, modern, and visually appealing.



NOTAS

The image features a vibrant, geometric pattern of overlapping triangles and lines in shades of green, yellow, orange, pink, and teal. In the top-left corner, the word "NOTAS" is prominently displayed in a bold, blue, sans-serif font. Below this title, the page is filled with 15 horizontal purple lines, providing a structured space for taking notes. The overall design is clean, modern, and visually appealing.



NOTAS

The image features a vibrant, geometric pattern of overlapping triangles and lines in shades of green, yellow, orange, pink, and teal. In the top-left corner, the word "NOTAS" is prominently displayed in a bold, blue, sans-serif font. Below this title, the page is filled with 15 horizontal purple lines, providing a structured space for taking notes. The overall design is clean, modern, and visually appealing.

NOTAS



**UNIDAD
Y MOVILIZACIÓN**
PARA LA TRANSFORMACIÓN

morena
La esperanza de México



INFP
INSTITUTO
NACIONAL
FORMACIÓN
POLÍTICA